



Aviso Legal

Artículo de divulgación

Título de la obra: La crisis del Estado y el narcotráfico latinoamericano

Autor: Kaplan Efron, Marcos Teodoro

Forma sugerida de citar: Kaplan, M. T. (1993). La crisis del Estado y el narcotráfico latinoamericano. *Cuadernos Americanos*, 4(40), 11-34.

Publicado en la revista: *Cuadernos Americanos*

Datos de la revista:

ISSN: 0185-156X

Nueva Época, año VII, núm. 40, (julio-agosto de 1993).

Los derechos patrimoniales del artículo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto dónde se indique lo contrario, éste artículo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional).
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>



D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:



Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ Sin derivados: si remezcla, transforma o crea a partir del material con propósitos comerciales.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

LA CRISIS DEL ESTADO Y EL NARCOTRÁFICO LATINOAMERICANO

Por *Marcos KAPLAN*
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS, UNAM

EL ESTADO NACIONAL de los principales países latinoamericanos ha tendido siempre, y de manera crecientemente significativa, a la expansión, la autonomización y la supremacía, como aparato e institución, como encarnación de élites públicas, y como actor central de la sociedad. Este *Leviathán Criollo* parece, sin embargo, culminar al mismo tiempo que entrar en una crisis; sufre una declinación y un desmantelamiento que para algunos preluiría el relegamiento a un papel secundario, y para otros incluso su fin. Por su parte, el narcotráfico latinoamericano surge y se desarrolla a partir y a través de los mismos factores, fuerzas y procesos que han producido el ascenso y supremacía del Estado primero, y su crisis y declinación posterior. Así producido, el narcotráfico se identifica con el desarrollo de una narcoeconomía, una microsociedad, patrones narcoculturales, y un cerco y acoso al Estado, desde fuera y en su interior, que termina por ser uno de los factores y rasgos más significativos de la crisis de aquél. En lo que sigue se analiza sucesivamente lo ocurrido con el narcotráfico, con sus interacciones e incidencias negativas o destructivas con respecto al Estado y los procesos y regímenes democratizantes, y a la crisis de uno y otros. Se tiene en cuenta la experiencia de los principales países latinoamericanos para la crisis del Estado, y la paradigmática experiencia de países andinos como Colombia, Perú y Bolivia para el narcotráfico y su incidencia en el Estado y su crisis.¹

¹ Véase Marcos Kaplan, "La Crisis del Estado Latinoamericano", en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* (Tel Aviv), vol. 1, núm. 2 (julio-diciembre 1990).

1. *El narcotráfico latinoamericano: el modelo andino*

DROGADICCIÓN y narcotráfico han tenido en las últimas dos décadas un ascenso veloz y un avance irresistible en un número creciente de países latinoamericanos.²

La creciente narcotización de la sociedad norteamericana y de Europa Occidental, sus niveles ascendentes de consumo y demanda, se vuelven condición de la oferta expandente que especializa a varios países andinos como productores, abastecedores y de tránsito. Colombia emerge como principal país fuente, traficante y beneficiario. Es el prototipo de lo que significan drogadicción y narcotráfico como constelación de fenómenos, fuerzas, procesos y resultados de tipo económico, social, cultural-ideológico, político, estatal, militar, con dimensiones nacionales e internacionales, un carácter hasta cierto punto históricamente inédito, y un perfil cambiante que no termina de lograr una cristalización definitiva.³

Una combinación de factores y circunstancias hace de Colombia, y de algunas de sus regiones, un centro privilegiado y un modelo prototípico del narcotráfico latinoamericano. El país cuenta en su haber con un terreno ideal para el cultivo; una ubicación excepcional para el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos; un Estado débil y corruptible; un entrelazamiento histórico de tra-

² El autor ha realizado un tratamiento más amplio y detallado de esta temática, en Marcos Kaplan, *Aspectos sociopolíticos del narcotráfico*, 3a. ed., México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1992; Marcos Kaplan, *El Estado latinoamericano y el narcotráfico*, México, Editorial Porrúa/Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991; Marcos Kaplan, *Drogas y Derechos Humanos*, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991; y en *El narcotráfico latinoamericano y los Derechos Humanos*, a publicar en 1993 por la Comisión de Derechos Humanos de México.

³ Sobre el proceso general de adicción y tráfico de drogas y el papel de Estados Unidos y países desarrollados, véase Antonio Escobedo, *Historia de las drogas*, 3 volúmenes, Madrid, Alianza Editorial, 1989; David Musto, *The American Disease, Origins of Narcotic Control*, expanded edition, New York, Oxford University Press, 1987. Sobre el resurgimiento y desarrollo del *Modelo andino*, véase *op. cit.*, nota 10, y Diego García Sayán, ed., *Coca. cocaína y narcotráfico; laberinto en los Andes*, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989; Diego García Sayán, comp., *Narcotráfico: realidades y perspectivas*; Gonzalo Flores, José Blanes, *¿Dónde va el Chacabambino?*, Cochabamba, Bolivia, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, 1984; *Coca-Foro Nacional sobre la Problemática Coca-Cocaína*, Cochabamba, Comité Cívico Pro-Cochabamba, 1988; *La cuestión de las drogas en América Latina; una visión global*, Caracas, Venezuela, Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), Presidencia de la República, sin fecha.

diciones sociopolíticas, mercantiles, empresariales, delincuenciales y violentas.⁴

El rápido ascenso del nuevo empresariado narcotraficante tiene antecedentes precondiciones: la explotación ilícita de esmeraldas; la "Bonanza Marimbera" de los años sesenta y principios de los setenta, prosperidad de los vendedores de marihuana en la costa atlántica; hacia la misma época, la apertura por el Banco de la República de su "Ventanilla Sinistra", por la cual ingresan millones de dólares de la prosperidad marihuanera.

Los actuales narcotraficantes de Medellín y Antioquia descienden en parte considerable del grupo de contrabandistas que operó desde fines de la década de los sesenta, con una tradición de paraíso de traficantes clandestinos y de movimiento ilegal de bienes sobre largas distancias. La posición geográfica es favorable al narcotráfico, como puente entre las regiones productoras de droga en el sur de América Latina y en Colombia, y un Miami que es puerta de entrada a los Estados Unidos y el Hemisferio Norte. A ello se agregan la proximidad a la zona franca de Colón (Panamá), centro internacional de contrabando; excelentes puertos naturales, facilidades para aeropuertos y laboratorios clandestinos.

Con estas ventajas comparativas, comerciantes y contrabandistas de Medellín y Antioquia montan una red de contrabando de mercancías y de drogas dirigido hacia los Estados Unidos; sustituyen el tráfico de marihuana por el de cocaína; adquieren la hoja y la pasta de coca en Perú y Bolivia, las producen también en Colombia, donde hacen la elaboración clandestina, y transportan y distribuyen la cocaína en los Estados Unidos.

Los narcotraficantes son, por una parte, comerciantes de origen social alto y medio, en proceso de ruina y descenso y en ejercicio de actividades socialmente rechazadas; y miembros de estratos bajos de blancos y de etnias de color. Se vinculan con actividades que dan liquidez financiera y posibilidades de manejo de un personal de desclasados y delincuentes.

La crisis de la industria antioqueña crea desempleo en Medellín y su periferia; arruina a pequeños y medianos industriales; desocupa

⁴ Sobre la especificidad de Colombia en el tráfico de drogas, véase Antonio García, *¿Adónde va Colombia?*, Bogotá, Tiempo Americano Editores, 1981; Eric J. Hobsbawm, "Murderous Colombia", en *The New York Review of Books*, 20 de noviembre de 1986; Bruce M. Bagley, "Colombia and the War on Drugs", en *Foreign Affairs* (New York, Council on Foreign Relations), vol. 67, núm. 1 (1988); Carlos Gustavo Arrieta et al., *Narcotráfico en Colombia; dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1990.

profesionales; afecta a amas de casa y desempleados. La irrupción de un mercado financiero ampliado por los flujos monetarios del narcotráfico refuerza la vinculación de nuevas capas sociales con el comercio ilícito. El lavado de dólares facilita el ingreso de narcodólares y ganancias adicionales. La abundancia de moneda en Medellín estrecha los nexos de captadores con el narcotráfico.

Los grupos narcotraficantes adquieren así poder, amplio radio de acción, capacidad de cobertura del mercado de la cocaína en los Estados Unidos. La elevada rentabilidad del narcotráfico induce a sectores disímiles a vincularse con él, y pocos quedan al margen del comercio ilegal.

Con la creciente demanda de los Estados Unidos, el comercio de cocaína asciende rápidamente en los años setenta, dominado por consorcios colombianos fuertemente estructurados, grandes y agresivas organizaciones criminales que se integran verticalmente y controlan, por actividades y países, todas las fases del proceso, y algunas se configuran como *internacionales delictivas*.⁵

El cultivo de coca se hace en Perú y Bolivia. La pasta se exporta a Colombia, para su refinado como clorhidrato de cocaína. En Colombia también se comienza a cultivar coca. Los narcotraficantes incorporan a su red a campesinos, laboratoristas y transportistas. La cocaína refinada es transportada y distribuida en Estados Unidos y Europa por vía marítima, aérea y terrestre, con escalas en Centroamérica y el Caribe y una fantástica variedad de métodos de contrabando. Los arduos problemas de transporte, comunicaciones, distribución, y de seguridad amenazada por las represiones gubernamentales y por los ataques de otros delincuentes, inducen a asegurar la disponibilidad y la permanente mejora de tecnologías sofisticadas. Las fabulosas ganancias cubren los precios de la materia prima y de la producción de la droga, los costos de transporte, la tecnología de avanzada, el alto número y diversificación del personal, los sobornos para la seguridad e impunidad de las operaciones.

Las organizaciones criminales de Colombia se implican en todos los aspectos del narcotráfico con una envergadura *internacional*, o incluso *transnacional*, a través de la sucesión o el entrelazamiento,

⁵ Sobre los nuevos narcotraficantes andinos, véase Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína*, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos, 1988; Mario Arango Jaramillo, *Impacto del narcotráfico en Antioquia*, Medellín, Editorial J. M. Arango, 1988; Paul Eddy, Hugo Sabogal and Sara Walden, *The Cocaine Wars*, Toronto-New York-London-Sidney-Auckland, Bantam Books, 1988; Guy Gugliotta and Jeff Leen, *Kings of Cocaine*, New York, Harper and Row, 1990.

de la cooperación y enfrentamiento, de diferentes *capos*, *familias* y *clanes*. Se avanza hacia la integración de consorcios altamente organizados y jerarquizados, proclives a la violencia, como tipo de organización vertical-transnacional, con división del trabajo entre los señores de la droga respecto de todos los niveles y aspectos del tráfico.

La organización cartelizada, sin embargo, no termina de lograrse. Las luchas entre organizaciones contribuyen a impedir la acción conjunta de los narcotraficantes frente a la represión; los hace más vulnerables por una parte, pero dificulta por la otra la acción de las agencias gubernamentales. Una selección darwiniana expulsa o destruye a los menos fuertes y capaces y consolida el poder de un número reducido de sobrevivientes.

El narcotráfico sigue siendo una coalición laxa de grupos diferenciados y rivales, basados en lazos de sangre, matrimonio y amistad, que colaboran entre sí para ciertas operaciones compartidas y para la lucha contra enemigos comunes. No llega aún a existir una mafia latinoamericana ni un cártel único de la cocaína.

Un mayor acercamiento a la cartelización podría darse quizá como respuesta a la "Guerra de las Drogas". Su amenaza ha inducido a los narcotraficantes colombianos a movilizar sus poderes para una mayor participación en el sistema político y para su control y uso con fines múltiples, sobre todo para la protección de sus personas y beneficios frente a la persecución gubernamental, la extradición, el enjuiciamiento y las sanciones, y la acción de las guerrillas y de las organizaciones políticas opositoras. Están interesados en la represión contra enemigos y opositores políticos, y en la ampliación de sus bases de negociación y maniobra respecto del gobierno colombiano.

En respuesta a dificultades y amenazas de todo tipo, los narcotraficantes colombianos han utilizado sus capacidades de adaptabilidad, resistencia y redespiegue, mediante el autoexilio, la diversificación y el fortalecimiento de sus relaciones y bases internacionales; hacen proliferar sus actividades y formas de actividad, sus productos y rutas, sus contactos con gobiernos corruptibles.

En Colombia realizan una escalada de soborno, corrupción, violencia, asesinato, terror, intimidación generalizada y masificación de las víctimas. Parecen proponerse la conversión de Colombia y, eventualmente, de otros países latinoamericanos, en base, rehén, objeto de dominación y explotación. Han establecido relaciones complejas y contradictorias con las guerrillas. Por otra parte, con

su presencia propia, y con la de propietarios y empresarios, militares, policías y políticos, organizan los "Escuadrones de la Muerte" para la intimidación y la destrucción de grupos guerrilleros, de izquierda, de la oposición democrática, y de dirigentes y militantes sociales y políticos. Los narcotraficantes utilizan también la cooperación entre sí y con otros grupos para aumentar la rentabilidad y la seguridad de sus operaciones. Una división del trabajo ha ido emergiendo en el ciclo completo del tráfico, tanto en lo nacional como en lo internacional, con creciente predominio de lo segundo sobre lo primero.

Los avances en la coordinación y en la envergadura de la organización criminal no han excluido la competencia entre los carteles de Medellín y Cali, incluso la guerra abierta; la proliferación de grupos más pequeños; los esfuerzos de ingreso al tráfico por otros grupos de Colombia y América Latina. A ello se agrega la guerra contra las drogas por parte de los gobiernos.

Ha terminado por darse la emergencia de una narcoeconomía, una narcosociedad, una narcocultura y una narcopolítica, incluso quizás un proyecto de paraestado o protoestado narcotraficante dentro del Estado nacional, para su control o sustitución.

2. Una economía criminal

EL narcotráfico se identifica cada vez más con una *economía criminal*, como su núcleo duro y su eje. Ante todo, se vuelve la industria de más rápido y sostenido crecimiento en el mundo. Constituye la única empresa transnacional latinoamericana de gran pujanza y envergadura y con notables éxitos.⁶

Las organizaciones narcotraficantes han hecho de Colombia a la vez el principal país fuente, traficante y beneficiario. Grandes y agresivos consorcios dominan la estructura y el funcionamiento del narcotráfico sud y centroamericano, y se implican en todos sus aspectos: financiamiento, plantaciones, laboratorios, transportes, contrabando, distribución y venta mayorista y callejera en Estados Unidos, Canadá y Europa, lavado de dólares, reinversión de beneficios. Algunas de estas organizaciones son multinacionales del

⁶ Véase N. H. Hardinghaus, "Droga y Crecimiento Económico: el Narcotráfico en las Cuentas Nacionales", en *Nueva Sociedad* (Caracas), núm. 102 (julio-agosto 1989); Pierre Pestieau, *L'Économie Souterraine*, París, Hachette, 1989; H. C. Felipe Mansilla y Carlos Tóranzo Roca, *Economía Informal y Narcotráfico*, La Paz, Bolivia, ILDIS, 1991; Marcos Kaplan, *Aspectos sociopolíticos*, cap. II y *El Estado latinoamericano y el narcotráfico*, cap. V.

crimen, verticalmente integradas en todas las dimensiones del negocio. El narcotráfico cuenta con bases, redes y circuitos que son consustanciales o ligadas con él, y otras que controla, impregna o afecta de manera directa.⁷

Una *primera dimensión económica* está dada por la expansión y la demanda del consumo, ante todo en Estados Unidos y otros países desarrollados, como precondition, estímulo y fuerza motriz de la producción, la oferta y el tráfico en general.

Una *segunda dimensión económica* se da por la enorme cuantía de las *inversiones* en y para el narcotráfico, su rentabilidad y su acumulación. Fuera de los narcotraficantes de Estados Unidos, los de Colombia llegan a ganar más que los de cualquier otra nación del hemisferio occidental. Colombia se vuelve el mayor procesador final, exportador y proveedor de cocaína.

Una *tercera dimensión económica* consiste en las enormes ganancias, inversiones y reinversiones, que son la base y el eje de una concentración y centralización del poder económico, el cual a su vez permite la expansión y racionalización de la organización y de las operaciones, el logro de una creciente capacidad de influencia y control respecto a la economía nacional, el incremento de la naturaleza y la capacidad transnacional de los grupos narcotraficantes.

Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares, su concentración en un pequeño número de dirigentes de consorcios, en el contexto de países atrapados por la inflación, la devaluación y la deuda, permiten comprar todo a precios absurdos; dan un enorme margen de maniobra económica, social y política, para presionar, influir, controlar, imponer decisiones. Se logra así una fuerte presencia en la economía nacional, se la irriga y se la controla; se modifican fuerzas y estructuras, se multiplican consecuencias directas e indirectas, se trasmuta el poder económico y financiero en poder social, cultural-ideológico, político, militar y represivo. El proceso global es acumulativo, con el mutuo refuerzo de sus diferentes dimensiones.

Así, a mayor rentabilidad, acumulación y concentración del poder económico, mayor expansión del monto físico y económico-financiero de las operaciones involucradas. Se expanden la superficie total de cultivo, el número de campesinos ocupados en el cultivo

⁷ Véase, Ciro Krauthausen/Luis Fernando Sarmiento, *Cocaína & Co. - Un mercado ilegal por dentro*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991; *El impacto de capital financiero del narcotráfico en América Latina - Simposio Internacional*, La Paz, CERID/Fondo Fiduciario Manuel Pérez-Guerrero, 1991.

de hojas de coca, las plantaciones, los laboratorios, la infraestructura de producción, procesamiento, transporte y distribución. Se da una constante agregación de nuevas áreas y países a la lista de espacios productores, de tránsito, de comercialización, de consumo, y la combinación de estos papeles. Se montan empresas industrial-financieras de enorme envergadura. Se compra y usa tecnología avanzada y productos químicos importados en los laboratorios; los más grandes y mejores aviones y barcos para el transporte así como sofisticados instrumentos de comunicación y radares para escapar al descubrimiento y a la aprehensión; los armamentos más modernos y poderosos. Gigantescos sobornos corrompen a funcionarios de Estados Unidos y de los países productores, de tránsito y de consumo, y logran protección respecto de los controles y sanciones de tipo aduanero, policiaco y judicial. Se dispone de una gama de talentos profesionales y de métodos refinados para el manejo de los enormes beneficios.

Subterránea y criminalizada, la narcoeconomía obstaculiza el análisis y la evaluación de su peso en la economía nacional, *v. gr.* en cuanto a ingresos en dólares, participación en el Producto Interno Bruto, montos y rubros de inversión, generación de empleos, contribución al crecimiento.

Puede suponerse, sin embargo, que la prosperidad por el narcotráfico tiene una cara oscura y efectos negativos. Ante todo, las inversiones de narcotraficantes en bienes inmobiliarios provocan una ola especulativa de altos precios. La abundancia de narcodólares hace que el dólar negro se coloque a la par del oficial, y que el contrabando se vuelva más rentable. Las industrias textiles y electrodomésticas sufren la competencia del contrabando y su consiguiente recesión.

Con la narcobonanza se da un desproporcionado aumento de las exportaciones y de las reservas internacionales que no se corresponde con la tasa real de crecimiento de Colombia. El ingreso derivado de las drogas explica el fortalecimiento de la balanza de pagos, el "pequeño milagro colombiano", la ausencia de crisis graves. En dos ocasiones, los principales jefes del narcotráfico colombiano ofrecieron hacerse cargo del pago de una deuda externa que alcanza los 11 000 millones de dólares.

País agobiado por múltiples problemas, Colombia dispone de una economía que desde hace algunos años goza de un crecimiento anual superior al 5%, de los cuales dos puntos serían referibles al flujo de narcodólares. Este flujo es favorecido por la disponibili-

dad de depósitos bancarios sin mayores controles y de una gama de instrumentos y mecanismos de lavado de narcodólares.

Cuarta dimensión económica: el lavado de dólares ha desarrollado, en Colombia, en otras naciones latinoamericanas, en los Estados Unidos y en los principales países desarrollados, una serie de formas y fases.

Ellas se entrelazan con diversas modalidades de inversión y consumo de los narcotraficantes y grupos conexos, como *quinta dimensión económica*.⁸

Los narcotraficantes combinan las operaciones en el campo legal y en el ilegal, y en sus entrelazamientos. Por una parte, constituyen y desarrollan la empresa del narcotráfico, con la mayor autonomía posible en la obtención de la materia prima, su procesamiento, transporte y comercialización, y para la maximización de beneficios. Por otra parte, aspiran a la inserción legal en la economía y la sociedad, a la aceptación de las élites dirigentes y grupos dominantes, a través de todo tipo de inversiones y empresas.

Como inversionistas, los narcotraficantes orientan sus recursos hacia actividades legales: propiedades inmobiliarias del campo y de las ciudades, ganadería y agricultura, construcción, comercio y servicios, recreación, industrias.

Todos los sectores económicos, pero sobre todo el comercio, se benefician por la ampliación de la demanda de bienes de consumo masivo. Las pautas consumistas y suntuarias de los narcotraficantes, el mantenimiento o aumento del empleo y del ingreso de sus servidores y clientes, generan o refuerzan una proliferación de actividades comerciales y profesionales para satisfacer una creciente demanda de bienes de consumo y servicios de los más variados tipos. Aumentan y prosperan con ello las profesiones y oficios correspondientes y el nivel de ocupación.

El narcotráfico contribuye a la generación de *empleo*, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes realizan directamente, en sus actividades lícitas e ilícitas, y por los efectos que inducen en otras ramas y sectores de la economía nacional.

El aumento del empleo se produce sobre todo en y por el tráfico ilícito, su estímulo al comercio y los servicios personales, por la incidencia del aumento de demanda proveniente de los ingresos criminales, las rentas y utilidades del narcotráfico, mucho más que de

⁸ Sobre el lavado de dólares, véase Jean Ziegler, *Suiza lava más blanco*, México, Editorial Diana, 1990.

los salarios. De todos modos, la irrigación del narcodinero a la economía de Colombia, Perú y Bolivia, se vuelve fuente de empleo e ingreso para considerables grupos y sectores, sobre todo marginados o de reducidos recursos, y les ha permitido, hasta cierto punto, salir de la indigencia, la posición inferior o precaria, para acceder al consumo de masas.

Los principales grupos que encuentran en el narcotráfico empleo y modos de vida son: a) *Campesinos*. b) *Químicos refinadores*, expertos en control de calidad, empleados de laboratorio. c) *Transportistas*, conductores de automóviles y camiones, pilotos de barcos y lanchas, de aviones de la flota aérea. d) *Los traqueteros*, representantes de los narcotraficantes en Estados Unidos, para el tráfico en éste y otros mercados de exportación. e) *Las mulas o burros*, hombres y mujeres que llevan cocaína en vuelos comerciales entre ciudades y países. f) Miembros de las fuerzas de seguridad de los narcotraficantes. g) Jóvenes disponibles para todo. h) Abogados para la defensa, y para el consejo legal en problemas suscitados por el narcotráfico y por las inversiones legales. i) Contadores para registro y control de los dineros ingresados por el narcotráfico. j) Consejeros financieros. k) Intelectuales, periodistas, escritores, profesionales de las ciencias sociales, expertos en relaciones públicas, para la defensa y apología del narcotráfico y de sus jefes. l) Personas utilizadas en empleos e ingresos complementarios, para políticos, gobernantes, administradores, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, militares, involucrados por sus funciones en acciones y decisiones referentes al narcotráfico. m) Empleados en la red de inversiones, propiedades y empresas legales de los narcotraficantes. n) Empleados en actividades comerciales y profesionales que satisfacen la demanda de bienes de consumo y servicios de los narcotraficantes, v. gr., arquitectos, decoradores, médicos, veterinarios, choferes, modelos, de-
pictistas, etcétera.

Desde el punto de vista de la economía de Colombia y de la situación y perspectivas de sus grupos mayoritarios, el narcotráfico tiene incidencias negativas. Además de las ya indicadas, los bolsos de prosperidad que crea o refuerza el narcotráfico coexisten con situaciones críticas para diferentes ramas y establecimientos industriales, sus empresarios, empleados y obreros. El gasto de los narcotraficantes no crea suficientes empleos porque no se invierte en infraestructura productiva ni se genera una demanda de materias primas y maquinarias de producción nacional. Los narcotra-

ficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilícitos, pero imponen drásticos aumentos del gasto en policía, judicatura, servicios médicos de emergencia. Muchos de los beneficios del narcotráfico son ganados en los Estados Unidos y otros países consumidores; son depositados en bancos o canalizados hacia inversiones y propiedades en aquéllos o en "paraísos bancarios" de terceros países. El ingreso de narcodólares a la economía de Colombia, Perú y Bolivia estimula la inflación, vuelve no competitivas muchas exportaciones legales. A ello deben agregarse los costos humanos y sociales de todo tipo que originan el narcotráfico y sus repercusiones negativas en la economía, la sociedad, la cultura y el sistema político de los países afectados.

3. Narcosociedad y narcocultura

AL rápido crecimiento de una narcoeconomía corresponde la emergencia de una narcosociedad y de una narcocultura. La primera abarca: grupos involucrados como protagonistas en carácter de dirigentes y de dirigidos y como beneficiarios, redes de complicidades, nuevos espacios sociales, víctimas.

Con el narcotráfico asciende y se desplaza al centro del escenario nacional e internacional un grupo social definido por su identificación con esta industria criminal, por pertenencias de clase y etnia, profesiones anteriores, niveles de instrucción, procedencias geográficas y grupos de edad.

El grupo narcotraficante se va perfilando como una combinación de estratos de una "lumpenburguesía" y de elementos marginalizados, del bajo mundo o delincuentes, que buscan la rápida movilidad social, a cualquier precio y a través de las actividades vedadas a otros estratos por razones sociales y culturales.

Los patrones que el nuevo grupo adopta, desarrolla o impone, entrelazan los vectores de la ilegalidad y la criminalidad, y los de la inserción e integración en una sociedad que, a su vez, fluctúa entre el rechazo y la aceptación.

El grupo narcotraficante no es monóticamente homogéneo ni definitivamente estabilizado. Su heterogénea composición sufre el impacto de sus transformaciones y vicisitudes.

El perfil de los narcotraficantes colombianos se ha constituido en un prototipo o paradigma, pero se reproduce, de modo menos desarrollado y con variaciones, en otros países como Bolivia, Perú y Brasil.

El narcotráfico da lugar a la aparición de una diversidad de actores, fuerzas, relaciones y estructuras, procesos sociales, que en conjunto apuntan a la constitución de una narcosociedad. Ésta incluye a los narcotraficantes como grupo protagónico, dirigente, organizador y principal beneficiario, a los incorporados y beneficiados directa o indirectamente con las oportunidades abiertas por la industria de la droga, a los integrantes de la consiguiente red de complicidades, a los nuevos espacios sociales, a la gama de víctimas.

La narcoeconomía conforma y transforma la sociedad y sus estructuras de clases, sobre todo en relación al empresariado, los sectores medios, el campesinado y el proletariado urbano, y contribuye a la definición y solución de la lucha por la hegemonía. La derrama del dinero del narcotráfico lo vuelve fuente primordial de empleo e ingreso para considerables grupos y sectores, esperanza de salida de las condiciones deprimidas o sumergidas, de ascenso social y de participación en los beneficios del crecimiento y la modernización. La narcoeconomía se vuelve a la vez factor, componente y resultado del crecimiento y la modernización.

La creación de empleos y actividades generadoras de ingresos incluye la amplia gama de sectores, grupos y profesiones que se mencionó en la economía criminal. Esta red de actores, fuerzas y relaciones sociales implica la creación o la ocupación de vastos e importantes espacios sociales, rurales y urbanos, de los cuales el narcotráfico es a la vez causa y efecto, base y eje, y principal beneficiario.

A la red de grupos directa e indirectamente inmiscuidos en el narcotráfico, como dirigentes y ejecutantes, como beneficiarios en distintos grados y órdenes de magnitud, corresponden en sentido contrario los grupos víctimas de la economía y la sociedad criminales. Esta cara más oscura del narcotráfico incluye a los consumidores y a los que sufren las consecuencias de la dinámica criminal que el narcotráfico representa, en sí misma y en sus proyecciones.

Entre *droga* y *crimen* existen varias conexiones, todas productoras de víctimas. Los consumidores son, sin embargo, la primera y principal categoría de grupos-víctima. El desarrollo del narcotráfico es inseparable del continuo aumento del consumo, en los países y a escala mundial. El consumo creciente de drogas sigue incorporando productos, naciones, clases y grupos. Coexisten y se suceden la marihuana, la heroína, la cocaína, las drogas sintéticas, el *crack* y el *basuco*, el *ice*. . . La difusión del consumo se da también en términos de países ya integrados a la constelación, en entrelazamiento con la incorporación de nuevos países para la producción,

la refinación, el tránsito y la distribución. Se tiende a convertir a los países productores y de tránsito en consumidores, y a los países consumidores y de tránsito en productores. El consumo abarca a todas las clases, esferas y espacios de las sociedades contemporáneas, que tienden a volverse consumidoras de drogas, pero a través de líneas de clase más o menos definidas, aunque cambiantes. Jóvenes, adolescentes y niños tienen creciente participación en el consumo y tráfico de drogas, con la tendencia a la baja permanente del nivel de edad mínimo.

La dimensión de la micro-sociedad de la droga y sus nuevos espacios incluye la creciente contribución del tráfico al deterioro del medio ambiente, en dos aspectos y niveles. Por una parte, el narcotráfico usa o fomenta técnicas y prácticas que producen o refuerzan la deforestación extensa e intensiva de cierta zonas (Alto Huallaga, Amazonia), a las que degradan además por la utilización de productos químicos destructivos. El principal impacto ambiental se refiere a la erosión del suelo y la contaminación por sedimentos en el sistema fluvial, por el uso de herbicidas, pesticidas e insecticidas, así como de los insumos químicos que se usan en la transformación de las hojas de coca en base de cocaína. Por otra parte, los programas de erradicación de la coca agravan la destrucción de la selva lluviosa, en tanto los cultivadores migran en busca de nuevas tierras. La represión contra el narcotráfico recurre en algunos países y zonas a herbicidas altamente nocivos para el medio ambiente.⁹

Con el consumo y tráfico de drogas emerge una *narcocultura* que se integra en patrones socioculturales más amplios para reforzarlos y modificarlos. Ella se estructura con los aportes y las interacciones de tres corrientes y vectores. En primer lugar, las pautas y tendencias pragmáticas, utilitaristas, de sectores del empresariado latinoamericano, su hipervalorización del dinero y del éxito y poder económicos a lograr con cualquier método y precio. En segundo lugar, los narcotraficantes contribuyen con sus pautas y tendencias delincuenciales, y la reivindicación de las mismas y de otras funcionales para el logro de las metas criminales: hipervalorización de la agresividad, la violencia, el ejercicio de la justicia privada; la utilización y la promoción de las formas de criminalidad convenientes al narcotráfico y la inversión lucrativa de sus ingresos. En tercer lugar,

⁹ Véase *Cocaine Production, Eradication, and Environment: Policy, Impact, and Options - Proceedings of a Seminar Held by the Congressional Research Service, February 14, 1990*, Washington, 1990, U.S. Government Printing Office.

las pautas y tendencias provenientes de la identificación con los datos fundamentales del camino/estilo de desarrollo y con el modelo de economía, sociedad y orden político de los países desarrollados. Integrada por estos tres tipos de componentes, la narcocultura sufre a la vez el condicionamiento y determinación de ellos y retroactúa para reforzarlos y amplificarlos.¹⁰

La cultura prevaleciente se vuelve sede, factor, condicionante y determinante de una subcultura del narcotráfico que pasa a integrarla, a reforzarla y amplificarla con sus contribuciones específicas. La narcocultura refleja y coproduce los factores y efectos del narcotráfico, en términos de destrucción física, psicológica, moral, económica y social de los narcotraficantes, sus colaboradores, beneficiarios y cómplices (activos y pasivos). A ello se agrega la destrucción de actores, recursos y tejidos sociales, en términos de enfermedad y muerte, de encarecimiento y rarefacción de los servicios de salud, prevención y curación y de reducción de productividad. La narcocultura difunde en productores, vendedores y consumidores de drogas una mentalidad y unos patrones de comportamiento que se centran en la posesión, el lucro, el consumismo, el hedonismo desenfrenado, el parasitismo y la destructividad. Se contribuye al menosprecio general por los esfuerzos y empresas para la creación de alternativas sociales e históricas que presupongan y busquen la solidaridad, la cooperación, el logro de grandes objetivos nacionales. La narcocultura expresa y refuerza la propagación de la delincuencia, la violencia, el crimen y el terror. Todo ello se proyecta hacia el sistema político y hacia el Estado.

4. *Narcopolítica y proyecto de narcoEstado*

Los grupos traficantes emergen como nuevo actor político en su creciente participación en el poder político, en su avance, sobre todo en Colombia, hacia un proyecto político y el esbozo de un narcoEstado. Ello resulta del peso específico de los narcotraficantes y sus actividades, de la necesidad de una protección política efectiva, frente a los Estados y sus aparatos legales, judiciales y policiales, a

¹⁰ Véase Marcos Kaplan, *Modelos mundiales*, ed. cit., y *El Estado latinoamericano y el narcotráfico*, ed. cit., pp. 99-105; Álvaro Camacho Guizado, "Colombia: Violencia y Narcocultura", en *Coca, cocaína y narcotráfico*, ed. cit., Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989; José María Simonetti y Julio E. S. Virgolini, *Del delito de cuello blanco a la economía criminal*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1990.

los tratados de extradición, y frente a la guerrilla, y las organizaciones civiles y políticas de los grupos-víctimas. Resulta también de la voluntad de incorporación al sistema, en condiciones de legalidad, pero conservando logros y poderes adquiridos, con la exigencia de plena aceptación por el *establishment* de los respectivos países. La dinámica de los procesos reales, sin embargo, determina luego la opción de una conquista violenta del poder político y del Estado.

Los narcotraficantes colombianos proyectan la imagen y despliegan las actitudes del patriotismo y la beneficencia social. Se convierten en principales inversores, propietarios y empresarios de Colombia, y en grandes contribuyentes a los ingresos fiscales del Estado y a las reservas de divisas del país. Compran diarios, semanarios y revistas, emisoras de radio y televisión, y una tecnología avanzada de información y comunicaciones, para eficacia del tráfico y para la política. Recurren a la contratación, el soborno, la intimidación y el asesinato de periodistas, para defensa e ilustración de sí mismos, y para disuadir a la crítica y la oposición.

Con el personal profesional y los medios de información y comunicación, y asesorados por expertos, los narcotraficantes lanzan campañas sociales de tipo humanitario, como parte de un esfuerzo para la captación y manipulación de seguidores y clientes en las ciudades. Intentan presentarse como benefactores de sus zonas de influencia y control, como una combinación del bandido social a la Robin Hood, que roba a los ricos para dar a los pobres, y de un proto o micro-Estado benefactor paralelo. En este aspecto se inscriben los repartos entre los pobres de dinero y bienes de consumo así como los programas de sentido cívico y social, como la construcción de viviendas para grupos de bajos ingresos. Narcotraficantes crean centros recreativos y participan directamente en actividades deportivas o de apoyo a las mismas. Con la injerencia en el deporte ganan simpatías y apoyos, y disponen de facilidades para el tráfico y el lavado de dólares. Con la misma intención política, los narcotraficantes dan pruebas de altruismo y de amor a la sociedad, a la religión (donativos a la Iglesia, limosnas para el culto), y a las artes (compras de pinturas y esculturas).

Con una injerencia más directa y agresiva en la política los narcotraficantes andinos crean vinculaciones estrechas con políticos, gobernantes, funcionarios públicos, senadores, diputados, magistrados. Intercambian favores con aquéllos; los compran, intimidan, someten e instrumentan. Aportan los "dineros calientes" para financiar los altos costos de las campañas electorales. Congresistas

colombianos se vinculan a negocios de narcotraficantes, o reciben su apoyo, o están bajo la sombra de la sospecha.

Los narcotraficantes no evalúan a políticos y gobernantes por criterios de ideología o programa sino de modo pragmático. Los subestiman o menosprecian, salvo en cuanto su capacidad de prestación de servicios, de tráfico de influencias, de protecciones y alianzas. Reparten dinero entre los dos partidos, apoyan a candidatos de diferentes partidos y figuran en sus listas, utilizan en su propio favor las inmunidades de los parlamentarios.

El narcotráfico se infiltra —en Colombia, pero también en Perú y Bolivia—, en las altas esferas del Estado, de la embajada de los Estados Unidos y de la Drug Enforcement Agency (DEA), en los principales organismos del gobierno y de la seguridad del Estado, de la justicia y de las fuerzas armadas.

Esencialmente pragmáticos, los narcotraficantes andinos recurren a los contactos, negociaciones y acuerdos con personas y organizaciones de las más variadas filiaciones ideológicas y políticas; desde guerrillas de izquierda, pasando por gobiernos y regímenes aparentemente muy alejados de los narcotraficantes, hasta grupos de la derecha extremista. El poder global alcanzado permite además a los narcotraficantes colombianos pensar en un partido propio, como el Movimiento Latino Nacional, y luego el Movimiento de Renovación Nacional o MORENA.

Hasta 1986, sin embargo, los grandes narcotraficantes se orientan más al logro y goce de poder e influencia en lo económico y en lo sociocultural que en lo político. Luego, la marcha del narcotráfico se orienta hacia la conquista y ejercicio del poder político, y hacia el cerco y acoso del Estado. Esta aceleración o viraje se debe al rechazo a la integración de los narcotraficantes por élites dirigentes y grupos oligárquicos, a la persecución de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, y a la escalada en la "Guerra de las Drogas".¹¹

Con el desarrollo de la "Guerra de las Drogas" por los gobiernos andinos y de los Estados Unidos se intensifican las acciones de soborno, terror, intimidación, agresión y asesinato de los narcotraficantes. Sus blancos son políticos, periodistas, jueces, altos funcionarios de la justicia, policías, dirigentes y cuadros de organizaciones

¹¹ Sobre la "Guerra de las drogas", véase Paul Eddy *et al.*, *The Cocaine Wars*, ed. cit.; G. Gugliotta/Jeff Leen, *Kings of Cocaine*, ed. cit.; Office of the President of the Republic, *The Fight Against the Drug Traffic in Colombia*, Bogotá, September, 1988.

sociales y políticas de oposición. La eficacia intimidatoria y disuasiva de esta estrategia de terror se manifiesta en las vicisitudes de los tratados de extradición.

El ataque contra el sistema político y el Estado apuntan a la policía y las fuerzas armadas, a la prensa, pero también a toda persona o institución que critique o ataque a los responsables y actividades del narcotráfico, a las dirigencias y cuadros de organizaciones sociales y políticas que expresan descontentos y demandas de cambios. Los narcotraficantes usan su poderío económico y financiero, su influencia social y cultural, la proliferación de recursos y métodos de violencia. En los últimos destacan los ejércitos privados de sicarios o profesionales del crimen por dinero, desarrollados por la tradición de violencia, las crisis económicas, los conflictos sociales y políticos, y sobre todo y cada vez más por el narcotráfico. Este potencial de violencia se difunde y amplifica hacia otras actividades delictivas (secuestros, extorsiones). Los narcotraficantes se arrojan la administración de justicia, con sus propios jueces y verdugos. La violencia se convierte en la única o mejor solución para toda diferencia entre personas y grupos.

Junto con la violencia específica del narcotráfico, paralela y entrelazadamente, la violencia de la guerrilla contribuye a las situaciones y procesos de crisis económica, disolución social y caos político, de acoso del Estado y de esbozo de su sustitución por un narco-Estado. En Colombia y Perú, las guerrillas y los narcotraficantes en expansión establecen relaciones complejas y contradictorias, de conflicto y coincidencia. Ello no anula las diferencias de naturaleza, de motivaciones y objetivos, la incompatibilidad de posturas respecto de la sociedad y el sistema político. Entre ambos términos no se dan una conexión íntima ni una alianza estrecha y a largo plazo, sino acercamientos y acuerdos de conveniencia, transitorios y siempre revisables. Las relaciones abarcan fases y formas que se suceden y combinan: confrontación, extracción de ventajas, coparticipación en negocios y beneficios, acciones contra enemigos comunes, nuevas disociaciones y conflictos, recuperación de las autonomías, reinicio de enfrentamientos sangrientos.

Por otra parte, se da sobre todo en Colombia una alianza de narcotraficantes con militares, hacendados y empresarios, para la organización de *Escuadrones de la Muerte* y *Ejércitos Privados*. Ellos son utilizados para la protección contra las guerrillas, y para la represión con alcances de masacre de campesinos, trabajadores, intelectuales, universitarios, profesionales, dirigentes y militantes sociales y políticos, representantes de grupos víctimas, narcotraficantes

rivales. El baño de sangre se extiende desde las regiones rurales a todo el país.

Este tipo de violencia criminal crea su justicia propia y su brazo armado; revela una mentalidad fanatizada y revanchista y una voluntad de remplazar al Estado normal en el combate sin coberturas ni trabas legales. El asesinato político, la violencia bestial, la destrucción implacable, son propiciados y justificados por la seguridad de la sociedad y del Estado, la defensa de las instituciones y grupos promotores, la anulación y el aniquilamiento de los grupos e individuos-víctimas.

Los grupos de "autodefensa" hacen surgir el brazo político de una narcoderecha militante y agresiva en espacios regionales de grandes conflictos. Ello asume la forma del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que busca amplias bases populares, la imposición de sus leyes en extensos territorios, la negociación con la derecha civil y con el gobierno, una ley de perdón y olvido para sus crímenes, el avance hacia la amnistía y legalización de los narcotraficantes.

Organización criminal en sí misma, el narcotráfico coproduce y amplifica otros actores y formas de criminalidad. Crea una proliferación de delitos, por la atracción de los altos rendimientos, por los servicios que requiere, para sí y para otras actividades económicas que genera, fomenta o integra. Ello constituye la gama del soborno y otras formas de corrupción, manipulaciones, estafas y defraudaciones, lavado de dólares; luchas entre bandas por el mercado, ajustes de cuentas, asesinatos de gobernantes, políticos, jueces, funcionarios, periodistas, policías y soldados.

La concentración de la actividad represiva del Estado en la lucha contra el narcotráfico, y la insuficiencia de sus resultados, contribuyen a la baja de la eficiencia de la justicia y de la policía, y de este modo favorece el incremento de la delincuencia y de la impunidad, sobre todo en espacios del narcotráfico como Medellín y Antioquia y Cali. Proliferan así asaltos bancarios, secuestros, extorsiones, asesinatos, contrabandos, bandas armadas de delincuentes comunes, "vengadores anónimos" que asumen por su cuenta las operaciones de "limpieza social" (contra marginales, indigentes, mendigos, niños abandonados, vagabundos, drogadictos, prostitutas, homosexuales).

La preocupación de los gobiernos andinos por la represión contra la guerrilla, la subversión o la oposición políticas, el narcotráfico, agravan la violación generalizada de los derechos humanos que deterioran la pretensión de existencia de un Estado de Derecho.

La proliferación de formas de violencia impone la "Ley de la Selva" en todos los aspectos y niveles de la existencia colectiva e individual. La población es sumergida en un medio ambiente de pérdida de respeto a la vida y a cualquier otro valor social y personal, de terror, de indefensión e inseguridad, envuelta en un clima de muerte, expuesta al espectáculo de la violencia cotidiana que termina por aceptarse como normal. La justicia es inoperante. El desconcierto cunde en todas las capas de la sociedad. Se imponen como opciones: la intimidación, la corrupción, la complicidad activa o pasiva, la resignación y el conformismo, el silencio y la pasividad, o bien el exilio y la muerte. La situación presente y la perspectiva futura se configuran por la inseguridad para todos, la degradación de la lucha social, política y militar, la descomposición y disolución de la vida social, el caos político, la desintegración nacional. Colombia aparece como un "pantano de sangre y barbarie" (Alfredo Vázquez Carrizosa); se tambalea al borde de la anarquía.

En esta dinámica, el Estado y los gobiernos de los países andinos están sometidos al acoso de la guerrilla y la oposición radical, de los grandes narcotraficantes, de los Escuadrones de la Muerte. Pierden el control de la fuerza para mantener el orden público, se desautorizan y deslegitiman. Los narcotraficantes parecen omnipotentes e indetenibles y se inclinan crecientemente hacia una intervención activa y directa en la política, al cerco y acoso del Estado. Se perfilan como amenaza a la seguridad nacional, y como desafío a la soberanía del Estado, a la autoridad y legitimidad de las autoridades públicas, a la existencia y vigencia de la democracia.

Esta contribución a la crisis del Estado se alimenta y es reforzada por las debilidades y limitaciones del régimen político, del Estado, del camino de desarrollo que se ha dado en Colombia y otros países latinoamericanos. En Colombia, Perú o Bolivia, toda actividad, sector o región de la vida nacional está bajo la influencia más o menos directa del narcotráfico. Gobiernos y Estados son débiles, vulnerables, ineficaces, por las coacciones que imponen y los efectos negativos que producen las fuerzas y estructuras del atraso, la dominación, la opresión, la desigualdad, la injusticia, la marginación, la pobreza. A ello se agregan las incidencias de la dependencia externa y, más recientemente, de una crisis a la vez nacional e internacional. Se multiplican y agravan desequilibrios y conflictos, violencias y destrucciones, especialmente en términos de narcotráfico, criminalidades de todo tipo, subversión guerrillera, oposiciones radicales. La insuficiencia del crecimiento, su estancamiento y regresión, las altas tasas de desempleo e inflación, los bajos niveles de

ingreso, consumo y servicios sociales para los grupos mayoritarios y sus precarias condiciones de vida, el empeoramiento de la situación sumergida y degradada del campesinado, generan o refuerzan los cinturones y bolsones de miseria y marginalidad, los sectores y espacios privilegiados de reclutamiento y despliegue de los narcotraficantes y de otros actores y formas de la criminalidad y la violencia.

La comunidad de intereses y proyectos entre gobiernos, élites dirigentes y grupos oligárquicos, que se identifican con fuerzas y estructuras de la dependencia y el atraso, implica, por una parte, que gobiernos y Estado sufren por la insuficiencia de la representatividad, de la legitimidad y el consenso, de la racionalidad e integridad, de las fuerzas y recursos, de la eficacia. No remueven los factores estructurales del narcotráfico, la criminalidad y la violencia, y contribuyen a reforzarlos.

La democracia limitada, el monopolio del poder, la falta de perspectivas de apertura del sistema, privan de formas de expresión y canalización a las insatisfacciones y protestas de origen socioeconómico y político. El Estado de los países andinos destina la mayor parte de los recursos a la represión y a la seguridad, en detrimento de los requerimientos de crecimiento, bienestar social y desarrollo integral. La insuficiencia o falta de reformas necesarias dificulta o impide la constitución de una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas contra el narcotráfico y otros fenómenos similares y entrelazados con aquél. Prevalece una desconfianza generalizada hacia los sucesivos gobiernos y el Estado en general.

Gobiernos débiles, desautorizados y deslegitimados, con recursos e instrumentos insuficientes, logran éxitos escasos y limitados, y sufren fracasos recurrentes en la lucha contra el narcotráfico. A ello contribuye el enfoque inadecuado o erróneo de la estrategia y la política oficiales respecto del narcotráfico, que han puesto el énfasis y privilegiado los medios tradicionales de lucha, que fracasan en la práctica: interdicción, erradicación, captura, procesamiento, penalización y sentencias.

Hacia 1989, los narcotraficantes colombianos desarrollan una escalada sin precedentes y un asalto final que lleva a la toma del Estado, a su control e instrumentación por aquéllos, para su servicio. La respuesta del Estado, las élites dirigentes y los grupos dominantes, los aparatos de represión y seguridad, y de sectores considerables de la sociedad colombiana, encuentra dificultades por un cambio de clima y de ánimo en la mayoría de la población, en cuanto a la necesidad y conveniencia de la "Guerra contra las Drogas". Ello

resulta de una convergencia de causas y circunstancias: incorporación de amplios sectores a la narcoeconomía y la narcosociedad, duración del conflicto con resultados reducidos o nulos, insuficiencia de la represión policial y militar, incertidumbre de una solución definitiva, evidencias de la fuerza, recursos y determinación de los narcotraficantes, impactos negativos de los factores externos (caída de la ayuda al desarrollo y del financiamiento extranjero, de los precios de productos de exportación, proteccionismo de los países desarrollados), reacción nacionalista y antinorteamericana, altos costos para Colombia de la violencia, la muerte, la inseguridad, los daños al crecimiento, el caos económico, la disolución social y la anarquía política. La negociación con el narcotráfico, su eventual legalización, son propuestas escuchadas con interés o abiertamente propugnadas.

5. La dimensión internacional

EL narcotráfico se presenta desde sus inicios como un fenómeno internacional. Nace, se desarrolla y opera cada vez más en América Latina y el Hemisferio Occidental, en Europa y el mundo entero. Se convierte en actor internacional con el cual se debe contar, Estado dentro del Estado pero más fuerte que éste, que ignora las fronteras y amenaza la soberanía y la seguridad de todo sistema político y país de Latinoamérica.

En lo regional y lo internacional, el narcotráfico constituye sus constelaciones y espacios en lo económico, lo social, lo cultural, lo político y lo militar. Dispone de fuerzas, instrumentos y mecanismos de propaganda, diplomacia, acción armada, corrupción, terror, intimidación y destrucción. Se reproduce, se amplifica y difunde más allá de fronteras sociales, ideológicas y políticas, de regímenes y sistemas.

El narcotráfico transnacionalizador contribuye al debilitamiento, a la desnaturalización y a la crisis del Estado latinoamericano, desde adentro y desde afuera de aquél. Hace obsoletas o irrelevantes las distinciones entre países productores y consumidores, culpables y víctimas. Afecta simultáneamente a los países productores, distribuidores, de tránsito y consumidores, los integra en una red de interdependencias, combina sus diferentes papeles en situaciones únicas. Lo internacional, o mejor aún lo transnacional, se vuelve referencia ineludible para las estrategias y políticas de lucha contra el narcotráfico. En ello, la situación y el papel de los Estados Unidos resulta altamente significativo.

Los Estados Unidos se han convertido en la nación más consumidora de drogas del mundo entero, pero también, y cada vez más, gran país productor, distribuidor y financiador. Es sede de un gran número de grupos productores, elaboradores, distribuidores y vendedores de marihuana, importadores y vendedores de cocaína, heroína y opio, reexportadores de ellas a Canadá, Europa Occidental y Japón. Es también sede de un creciente lavado de narcodólares. La mayor parte de las ganancias del tráfico quedan en los Estados Unidos, se reparten entre grupos norteamericanos dedicados al mayoreo y al menudeo. Los beneficios directos e indirectos del narcotráfico irrigan el sistema económico-financiero. Por otra parte, el consumo de drogas produce daños físicos y mentales, y consecuencias negativas en lo económico, lo social, lo cultural y lo político, así como un avance avasallador de la delincuencia.

La estrategia y la política del Estado norteamericano han oscilado entre la flexibilidad permisiva y la prohibición represiva. Han tendido a la simplificación y disociación del problema, reducido a una sola dimensión, a una causa, un aspecto y un efecto, solucionable por una estrategia y una política también unidimensionales que supriman la oferta internacional y el consumo incontrolado en los Estados Unidos. Estrategia y política privilegian lo externo sobre lo interno, la producción y la oferta sobre la demanda y el consumo, la represión sobre la prevención.¹²

La culpabilidad se transfiere a grupos y países externos a los Estados Unidos, que deben hacerse cargo de los costos y dolores de un cambio superador. Se da prioridad a la supresión de la producción y la oferta, no a la supresión de las causas en la demanda y el consumo de la población norteamericana. Se busca la erradicación de plantíos, la instrucción de laboratorios y redes de transporte y distribución, la captura y procesamiento de los narcotraficantes, la intercepción de las drogas destinadas al consumo de los Estados Unidos que provienen de más allá de sus fronteras. Se presiona a gobiernos latinoamericanos para la realización de las acciones propugnadas.

En cuanto al tráfico y consumo internos a los Estados Unidos, el gobierno federal ha asignado tradicionalmente bajos recursos pre-

¹² Véase D. Musto, *The American Disease*, ed. cit.; A. Escotado, *Historia de las drogas*, ed. cit., vols. 2 y 3; Michael Massing, "The War on Cocaine", en *The New York Review of Books*, 22 de diciembre de 1988; Peter R. Andreas, Eva C. Bertram, Morris J. Blachman, Kenneth E. Sharpe, "Dead-End Drug Wars", en *Foreign Policy* (Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace), núm. 85 (Winter 1991-92).

supuestarios al rubro drogadicción/narcotráfico. Dentro de éste, ha discriminado a los niveles médico-sanitarios, de prevención, curación, rehabilitación y asistencia permanente. Se ha carecido de una política integrada, preventiva-coercitiva-recuperante. Los sistemas y aparatos de derecho criminal, policiales, judiciales, carcelarios, políticos y administrativos del Estado norteamericano se han visto rebasados, y no han tenido éxitos indiscutibles y definitivos en la supresión final de las organizaciones que lucran con la adicción y el tráfico.

Causas de este fracaso son: la división feudalizante de la burocracia estatal en un alto número de agencias y su competencia mutua, la ineficiencia relativa, la inferioridad de recursos y equipamientos. A ello se agregan la tolerancia, la connivencia o la inacción respecto de los factores que posibilitan la existencia y el éxito del narcotráfico: consumo interno de los Estados Unidos; políticas restrictivas y discriminatorias contra producciones y exportaciones de los países latinoamericanos involucrados en el narcotráfico, expansión en la impunidad del lavado de dólares, las propiedades e inversiones de los narcotraficantes en los Estados Unidos, provisión a los narcotraficantes latinoamericanos de insumos químicos, tecnologías de producción, transporte y comunicaciones y de armamentos por parte de empresas norteamericanas (y europeas).

A pesar de las proclamaciones de guerra, de los aumentos en recursos y gastos gubernamentales, en prohibiciones y represiones, el problema de la adicción y el tráfico en los Estados Unidos no se atenúa ni desaparece, y por el contrario tiende a agravarse.

Pese a este fracaso reiterado, el Estado norteamericano ha seguido dando prioridad a la cara externa del problema, la supresión de la oferta proveniente de los países de producción y de distribución y de algunos de sus grandes traficantes. Ello se ha manifestado en las leyes y programas de cooperación bilateral de los Estados Unidos con países productores y de tránsito, con el sistema de certificación y la autorización de sanciones a los que no cumplan a satisfacción con los compromisos contraídos. Se ha impuesto así un tipo de cooperación binacional condicionado por una gran asimetría de compromisos, situaciones y consecuencias.¹³

¹³ Véase *op. cit.*, nota 19 y *El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos; Informe de la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos*, México, FCE, 1988; *Las Américas en 1989: consenso para la acción, Informe del Diálogo Inter-Americano*, Washington, D.C., The Aspen Institute, 1989.

El Estado norteamericano no ha mantenido una posición de lucha inalterable y consecuente contra el narcotráfico; ha subordinado y limitado dicha lucha a sus intereses económicos, políticos, diplomáticos y estratégicos de gran potencia, y a poderosos intereses privados; ha entrelazado la guerra de las drogas con su política exterior.

Esta estrategia y política han resultado ineficaces y contraproducentes en su fase interna, pero también en la externa. Han implicado el ataque, la perturbación, daños diversos, a los países que han respondido a las señales del mercado de los países desarrollados. Se han ejercido presiones de todo tipo sobre gobiernos latinoamericanos, con efectos distorsionantes y altos costos humanos, financieros, de seguridad y justicia, éticos.

Para los gobiernos de Estados Unidos y de los países andinos, la llamada Guerra de las Drogas combina éxitos insuficientes y fracasos considerables. Apenas se ha tocado la producción, el tráfico, el consumo, el ingreso, los avances, de la narcoeconomía y de los principales grupos de la narcosociedad, tampoco se ha frenado significativamente su dinámica de poder político. El narcotráfico sobrevive y se expande, sigue mostrando un alto grado de inventiva y adaptabilidad respecto de amenazas, ataques y nuevas situaciones.